JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO

Palmira, tres (3) de noviembre de dos mil veinte y dos (2022)

Asunto: **Acción de Tutela**
Accionante: Elizabeth Ortega Carvajal
Agenciada: Gloria Cecilia Camargo **C.C. 41.433.915**
Accionado: Emssanar EPS S.A.S.
Vinculados: Ministerio de Salud y Protección Social, Secretaría de Salud Departamental del Valle del Cauca y otros
Radicación: 76-520-41-89-001-2022-00495-01

Estando a despacho el expediente de la referencia, sería del caso entrar a proveer sobre la impugnación de la sentencia proferida en este asunto por el Juzgado Segundo de Promiscuo Municipal de Florida, Valle del Cauca, si no fuera porque se ha advertido un motivo de nulidad, que debe ser previamente saneado.

Sea lo primero observar cómo en esta acción se hace referencia al estado de salud mental de la agenciada, su estado de abandono, a las condiciones de inseguridad en que vive, a la deficiente prestación del servicio de salud que se le ha brindado y por eso se pretende que la autoridad judicial la proteja en sus derechos a la vida digna, salud, integridad personal, se plantea la opción de que sea internada por un breve tiempo mientras superar su estado de salud mental que le está afectando la existencia en condiciones dignas. Que según se refiere dicha señora ingresó por el servicio de urgencias de la ESE Hospital Raúl Orejuela Bueno de Palmira, por razón de una afectación mental, pero se escapó y no culminó su atención médica según se comprende.

Al respecto se tiene en cuenta que en primera instancia se dio trámite a esta acción, se negó la medida provisional, pero se amparó finalmente en forma parcial, en cuanto se le ordenó a su EPS EMSSANAR que le brinde la atención en salud, pero se negó el acceso de la agente oficiosa a la historia clínica de su amiga agenciada, lo cual fue motivo de impugnación por cuanto la accionante estima que no es suficiente para garantizar el bienestar de la enferma. Condiciones que persisten según lo refirió la accionante al contestar le interrogatorio de parte llevado a cabo por este despacho.

Ante lo expuesto cabe recordar que acorde a lo previsto en la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas, físicas y mentales fue expedida la ley **1346 de 2009** por medio de la cual nuestro país la acogió. Así resulta en lo pertinente, que de acuerdo con sus artículos 11 el Estado se obligó así:

“Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.”

Significa ello que la protección ha de ser no solo para las personas afectadas por situaciones del conflicto armado, sino para quienes estado por fuera del mismo se encuentren física y/o mentalmente afectadas.

De igual modo en el artículo 12 de dicha ley se determinó entre otras cosas, que los Estados partes, y Colombia lo es se comprometen así

“ARTÍCULO 12. IGUAL RECONOCIMIENTO COMO PERSONA ANTE LA LEY.

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos, por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas...”

No sobra señalar que en virtud de dicho artículo 12, fue expedida luego la ley 1996 de 2016 cuyo objeto “es establecer medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, mayores de edad, y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. ”

Norma que además le impone entre otros, a las Personerías la función de participación en la valoración de Apoyos a quienes lo soliciten.

Sirva este contexto normativo para señalar que si bien anteriormente la legislación y trato social imponían tratar a un posible enfermo mental como persona discapaz altamente sometida a tratamiento interno hospitalario, hoy por hoy, se parte de una postura contraria y es que por mandato legal se les deben respetar sus derechos,

incluido el acceso al sistema de salud, pero bajo el entendimiento que son plenamente capaces, que tiene facultad dispositiva y que pueden recibir apoyos, es decir colaboración de sus personas de confianza tanto para atender sus necesidades básicas, como para acompañamiento en sus asuntos médicos, o de negocios, primando su voluntad por regla general, lo cual al parecer no conocen la accionante, ni su agenciada y bien podría servir para contribuir a solucionar su situación.

Se debe considerar además, por aplicación al principio de la buena fe constitucional (art. 83), que en efecto la agenciada requiere la debida atención en el sistema de salud, que además requiere protección y eventualmente apoyos, al tenor de las normas antes citadas, lo cual en todo caso, no permite desconocer que sí tiene capacidad legal para disponer de su vida, porque así lo determinan las leyes vigentes.

Así las cosas se percibe que a este tramite no fueron vinculadas ni la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO DE PALMIRA, prestadora del servicio a la personas inscrita en el régimen subsidiado ni la personería municipal de Palmira encargada de velar por el cumplimiento de las normas por parte de los servidores públicos y quien además tiene la función de participar en la valoración de apoyos de que trata la ley 1996 de 2019, por eso se deberá nulitar parcialmente lo actuado para integrar a todas las entidades que pudieren verse afectadas con una decisión de fondo,. Que se les debe garantizar el principio de la doble instancia y dar la oportunidad de pronunciarse con relación a este asunto.

De manera específica respecto de la Personería Municipal se observa como en declaración de parte la accionante manifestó que ha sido poco su actuación en procura de los derechos de la agenciada GLORIA CECILIA CAMARGO, aunque conoció el caso.

Consecuente con el sentido de la decisión que se trae se nulitará la sentencia de primera instancia. En su lugar dado que al inicio fue solicitado una medida provisional para una mujer de 61 años de edad, como es decir de la tercera edad, con posible afectación a su salud mental, inscrita en el régimen subsidiado, lo cual indica baja condición socioeconómica, y que se trata de un sujeto de especial protección constitucional, es por lo que se emitirá la orden que este despacho estima adecuado, mientras se decide de fondo este proceso.

Sin mas comentarios se,

RESUELVE

PRIMERO: NULITAR parcialmente lo actuado dentro de esta acción de tutela promovida por la señora ELIZABET ORTEGA CARVAJAL, agente oficiosa de GLORIA CECILIA CAMARGO, contra EMSSANAR EPS S.A.S., a partir inclusive de la sentencia de primera instancia.

SEGUNDO: ORDENAR que el despacho de primera instancia se sirva vincular a la gerente del ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO DE PALMIRA y al señor Personero Municipal de Palmira, como integrantes de la parte accionada, a quienes les hará la respectiva notificación conforme al artículo 8 de la ley 2213 de 2022 y dará un término para que ejerzan la defensa.

TERCERO: ORDENAR A TITULO DE MEDIDA PROVISIONAL mientras se define de fondo este trámite:

a) **Que la ESE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO de PALMIRA**, le asigne cita para valoración por psiquiatra a la señora GLORIA CECILIA CAMARGO ECHEVARRY la cual deberá surtirse dentro de los seis días hábiles siguientes, so pena de incurrir en desacato. Siendo de cargo de la agente oficiosa el informarle de tal cita para que concurra si es su voluntad, conforme lo antes expuesto. Del cumplimiento dado se servirán informar al despacho de primera instancia.

b) **Ordenar a EMSSANAR EPS S.A.S.** brindarle en forma inmediata, toda la atención en salud, integral, médica, farmacológica, hospitalaria, o en casa, que eventualmente le sea prescrita a la señora GLORIA CECILIA CAMARGO, por el médico psiquiatra si así éste lo prescribe, so pena de incurrir en desacato. Del cumplimiento dado se servirán informar al despacho de primera instancia.

c) **ORDENAR al señor PERSONERO MUNICIPAL de PALMIRA** que dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de esta decisión, a través de alguno de sus delegados se sirvan brindar a la accionante, a la agenciada GLORIA CECILIA CAMARGO y a la hermana de ésta, a saber la señora Licinia (quien aparece mencionada en el expediente y puede ser ubicada a través de la accionante), la información educativa y explicativa relativa al régimen de Valoración de Apoyos previstos en la ley 1996 de 2019, para que se determine si en este caso procede hacer uso de tal figura jurídica. **De igual modo** velará porque a la señora GLORIA CECILIA CAMARGO, se le brinde la atención en salud, especializada mencionada en este expediente, dado que ya se encuentra inscrita en el régimen subsidiado. Del cumplimiento dado se servirán informar al despacho de primera instancia.

CUARTO: NOTIFIQUESE este auto en la forma mas expedita.

J. 2 C. C. Palmira
Rad. 76-520-40-89-001-2022-00495-01
Nulidad parcial

QUINTO: DEVUÉLVASE este expediente al despacho de origen, previa cancelación en el libro radicador.

CÚMPLASE

LUZ AMELIA BASTIDASS SEGURA
JUEZ

Firmado Por:

Luz Amelia Bastidas Segura

Juez

Juzgado De Circuito

Civil 002

Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f40a4023692d636fdf36fb98082414bf0e35cfb0b14997112d9933d872763410**

Documento generado en 03/11/2022 03:06:39 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>